El objeto del derecho agrario en España: perspectiva y prospectiva.

The purpose of agrarian law in Spain: perspective and prospective.

ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Universidad de La Rioja. Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña, 60,26004. Logroño. La Rioja. (España)

angel.sanchez@unirioja.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8196-3754>

Recibido/Received: 06/03/2025. Aceptado/Accepted: 23/04/2025.

Cómo citar/How to cite: Sánchez Hernández, Ángel, “El objeto del derecho agrario en España: perspectiva y prospectiva”, *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros* 264 (2025): 96-136.

Este artículo está sujeto a una [licencia “Creative Commons Reconocimiento-No Comercial” \(CC-BY-NC\)](#). / Open access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](#).

DOI: <https://doi.org/10.24197/recep.264.2025.96-136>

Sumario: Introducción. 1.- La formación del derecho agrario en España. 1. 1ª.-Etapa: el Derecho agrario como rama del ordenamiento que regula, fundamentalmente, la propiedad de la tierra. 1. 2ª- Etapa: se evoluciona pasando de la atención en el fundo apropiable a la actividad de producción agraria. 1. 3ª.-Etapa: desde la constitución española de 1978 y la adhesión de España a la Unión Europea hasta la actualidad. 2.-Prospectiva del objeto del derecho agrario. 3.-Conclusiones.

Resumen: Se trata de redefinir el objeto del Derecho Agrario, es decir, repensar el objeto de las normas jurídicas agrarias. Quedó atrás el Derecho agrario únicamente como objeto de la actividad de producción agraria y del acceso a los bienes necesarios para la misma. El Derecho Agrario actual se ocupa, además, entre otros aspectos, de la seguridad alimentaria, de la salubridad de los alimentos, del uso agrario del agua, de la defensa del medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático, de las nuevas tecnologías para la modernización del sector agrario... El objeto del Derecho Agrario en España se ha expandido hasta abarcar nuevas temáticas, aunque su núcleo duro siga siendo la actividad de producción agraria. La actualización y ampliación del objeto del Derecho Agrario incide sustancialmente en el acervo normativo que constituye nuestra disciplina.

Palabras clave: Perspectiva, Prospectiva, Derecho Agrario, España.

Abstract: It is about redefining the object of Agrarian Law, that is, rethinking the object of agrarian legal norms. Agrarian Law was left behind only as an object of agricultural production activity and access to the goods necessary for it. Current Agrarian Law also deals, among other aspects, with food safety, the healthiness of food, the agricultural use of water, the defense of the environment, the fight against climate change, new technologies for the modernization of the agricultural sector... The object of Agrarian Law in Spain has expanded to cover new topics, although its hard core continues to be the activity of agricultural production. The updating and expansion of the object of Agrarian Law substantially affects the normative heritage that constitutes our discipline.
Keywords: Perspective, Prospective, Agrarian Law, Spain.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo no pretende exponer la historia del Derecho Agrario, ni tampoco enumerar minuciosamente las leyes y disposiciones que integran o integraron el acervo normativo del Derecho Agrario.¹

No me parece apropiado en este lugar, al exceder mi propósito, tratar a fondo la temática del concepto y autonomía del Derecho Agrario, entrando en la evolución de su definición como disciplina con una identidad propia diferente de otras ramas del Derecho y que cuenta con unos principios y un método propios, siendo evidente que cuenta con características que no se dan en el Derecho Civil o el Derecho Administrativo, o en otras ramas del Derecho.

Tampoco pretendo reseñar exhaustivamente el alcance y las características de esta disciplina, en su posición de Derecho Privado (separando -en lo posible- las reglas que son propias de la intervención administrativa), su realidad jurídica, que no es sólo lo legislado -presente o pasado, o esté por legislar-, sino también, y ello es lo fundamental, destacar el núcleo central del mismo, subrayando sus principios y los conceptos técnicos propios de la materia que pertenecen al Derecho Agrario en sentido estricto.

Para ello intento redefinir el objeto del Derecho Agrario, es decir, repensar el objeto de las normas jurídicas agrarias. Quedó atrás el Derecho Agrario únicamente como objeto de la actividad de producción agraria y del acceso a los bienes necesarios para la misma.

¹ No procede aquí remontarse al Código de Hammurabi, primera compilación de leyes de la que se tiene noticias, en época del Rey Hammurabi de Babilonia, en 1750 A.C. Ni tampoco a las Leyes de las XII Tablas (porque estaban escritas en doce tablillas de bronce), Roma, 450, A.C.

El Derecho Agrario actual se ocupa, además, entre otros aspectos, de la seguridad alimentaria, de la salubridad de los alimentos, del uso agrario del agua, de la defensa del medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático, de las nuevas tecnologías para la modernización del sector agrario...

En suma, el objeto del Derecho Agrario en España se ha expandido hasta abarcar nuevas temáticas, aunque su núcleo duro siga siendo la actividad de producción agraria. La actualización y ampliación del objeto del Derecho Agrario incide sustancialmente en el acervo normativo que constituye nuestra disciplina.

En cuanto a la evolución del objeto del Derecho Agrario en España, dejando al margen los antecedentes de la Ilustración Española del S. XVIII – Joaquín Costa y Gaspar Melchor de Jovellanos- se analizan sucintamente tres etapas que ponen de manifiesto como el objeto del Derecho Agrario responde a una acumulación sucesiva de aspectos y referencias en el tiempo atendiendo a los cambios técnicos, económicos y sociales de la propia actividad agraria.

1.-Se alude en la primera etapa, que se inicia a finales del S.XIX, aprobado el Código Civil de 1889, a cómo no se contaba con un régimen jurídico especial para el campo. El Código Civil no es un Código Agrario a pesar de que en no pocas ocasiones este texto legal cuenta con una terminología rústica: tierras, fundos, fincas, frutos, usufructos de viñas, olivares, ganados, distancias entre plantaciones, arrendamientos rústicos...

Sin embargo, el Código Civil no es un Código rural que contenga la precisa regulación que requiere el objeto del Derecho Agrario, rama que quedo olvidada en la legislación renovadora del S. XIX. El Código concibe la actividad agraria como una forma de goce de los bienes -de los fundos, de las fincas, de los predios – pero muy lejos de apreciar como un elemento diferenciador el hecho técnico-económico de la misma. Queda patente cómo el Código Civil manifestó una clara despreocupación por lo agrario más allá de las referencias a la propiedad de la tierra y de los ganados y de sus derivaciones en los derechos reales -usufructo, servidumbres, superficie rústica- o su derivación en los derechos personales - arrendamientos rústicos, aparcería...-

Por todo ello, en la primera etapa examinada, el objeto del Derecho Agrario viene referido básicamente a la propiedad de la tierra y de los bienes agrarios que a ella se conectan -conexionan-. Por eso, el Derecho

Agrario de esta etapa se ocupó fundamentalmente de la tierra, de su propiedad, o, por ejemplo, de su reorganización a través de la reforma agraria o de otras figuras como las permutas de fincas rústicas.

Se gestó así, un reduccionismo del objeto del Derecho Agrario, ya que no alcanzó otros aspectos más allá de la propia propiedad de la tierra y del ganado y sus derivaciones.

2.- Se repasa la segunda etapa, que comienza con el S. XX y concluye con la aprobación de la Constitución Española de 1978.

Pocas décadas después de la entrada en vigor de nuestro Código Civil, en el ámbito agrario y no sólo en este ámbito, se reconoció la necesidad de superar el individualismo del Código Civil inspirado en la consideración de que la libre iniciativa –una libertad si acaso débilmente limitada- se encargaría de proveer la necesidades y conveniencias del productor agrario. Pero para rectificar este liberalismo del Código Civil aparecen en las primeras décadas del S.XX un cúmulo de leyes bajo una influencia social y productivista que traslucen la ya incipiente especialización del naciente Derecho Agrario en España y que dejan ya patente cómo el objeto de sus normas va más allá de la simple redistribución de la tierra o de la reforma agraria. El agro ha de tener su propia regulación apropiada a su peculiar naturaleza y su objeto ha de ser manifestación del hecho técnico de la propia actividad agraria, respondiendo a sus condicionantes económicos y sociales. Se comienza la modificación de los planteamientos individualistas propios del Código civil que, como ya he señalado, circunscribían el objeto del Derecho agrario a la reforma agraria. El liberalismo individualista del Código Civil se sustituye, aunque sólo en parte, por normas con fines sociales a través del dirigismo estatal -vg. Real Decreto-Ley de 1929, disponiendo sean de aplicación las normas que se insertan para los contratos de arrendamiento de fincas rústicas-.

Con la Constitución Española de 1931 se aprueba la Ley de arrendamientos rústicos de 1935, y tras la Guerra Civil se aprueba una legislación colonizadora, leyes de reforma y desarrollo agrario con planteamientos más sociales. Así, el objeto del Derecho Agrario se fue edificando a golpe de leyes especiales sobre el viejo solar del Código Civil, si bien sin olvidar las nuevas referencias a figuras como la “empresa agraria” buscando aumentar la capacidad productiva y estabilidad social de la propia actividad.

3.- Seguidamente se recorre la tercera etapa de la configuración del objeto del Derecho Agrario, que se inicia con la Constitución Española de 1978 –art. 130- y que alcanza hasta la actualidad.

En esta etapa, el objeto del Derecho Agrario se orienta hacia aspectos técnicos y de mejora de la productividad de la actividad agraria, organización del territorio y con la protección de los recursos naturales. El objeto del Derecho Agrario se abre a través de la idea de conexidad a otras referencias o aspectos, distintos de los bienes agrarios necesarios para la propia actividad agraria, pero que son útiles para la misma, vg. semillas, agroquímicos, ... Así, con la adhesión de España a la Unión Europea, a través de la Política Agraria Común, el objeto del Derecho Agrario va más allá de la propia actividad de producción agraria, alcanzando a la comercialización, a la organización común de los mercados, a precios de intervención, a cuotas de producción e indicadores de calidad,... Se han aprobado en el marco de la Unión Europea nomas sobre estabilización de mercados y garantías de abastecimientos, ayudas a los productores agrarios, derechos de producción, intereses del consumidor, calidad y seguridad alimentaria, responsabilidad civil por daños causados por productos agrarios defectuosos, además de normas de Desarrollo Rural,...

Por otra parte, la nueva Política Agraria Común ha cambiado el papel del productor agrario en relación con la sociedad y el Estado. Si bien originariamente los Estados contaban con un sistema de control sobre el uso adecuado de los fondos presupuestarios de la Unión Europea, ahora lo que se pretende es controlar la voluntad del productor agrario para gestionar su Explotación Agraria de acuerdo con las expectativas y estándares sociales. Este modelo proporciona a la Unión Europea y a los Estados una gran influencia para implementar prácticas ambientales y de bienestar animal, todo lo cual afecta a la independencia y libertad del agricultor para maximizar la producción agraria.

Para terminar, se expondrá la prospectiva del objeto del Derecho Agrario, que a mi juicio es cada día más amplio para responder por conexidad a los nuevos contextos en los que se desarrolla en la actualidad la actividad agraria.

1.- LA FORMACIÓN DEL DERECHO AGRARIO EN ESPAÑA.

Se pueden distinguir diversas etapas en la evolución del Derecho Agrario en España hasta su configuración presente por acumulación sucesiva de aspectos básicos a medida que se han producido, en el tiempo, los cambios técnicos, económicos o sociales y que han constituido el objeto básico de su propia normativa.

Dejando al margen los posibles antecedentes representados por (Costa, 1915)² y (Jovellanos, 1795)³ referidos a la Ley Agraria, ya que no trato de realizar una síntesis histórica, sino aventurarme, sobre todo, a trazar los hitos habidos en la disciplina en el último siglo en España.

Como escribía (De Castro, 1954, p.378), “en los dos últimos siglos, el Derecho se ha ido dividiendo en ramas, y, en general tendencia a la especialización, el Derecho Agrario ha sido uno de los últimos entre las que aspirara a la autonomía; lo que no es extraño, pues hasta hace poco lo agrario carecía de una propia regulación...El campo, que de siempre fuera materia de especial y cuidada ordenación jurídica y cuya esencial problemática es tan antigua, queda olvidado en la legislación renovadora del siglo XIX”.⁴

² (Costa, 1915) postuló la recuperación de la economía y de la sociedad agrarias a partir de las tradiciones españolas y (Costa, 1911) una política de fomento, como base para la reconstrucción del país.

³ (Jovellanos, 1795) alienta varios proyectos y realizaciones de auténtica envergadura, entre ellos el “Informe de la Sociedad económica de esta corte al real y supremo Consejo de Castilla en el expediente de la ley agraria”.

⁴ (De Castro, 1954, pp. 377-404 concretamente en la p.378): “En Roma, las leyes agrarias, la intervención censoria sobre el cultivo, en fin, la real y completa regulación de la tierra queda fuera del *ius civile*, o al menos no fue recogida en el *Corpus justiniano*. En la misma Roma imperial y, más aún, en la Edad Media se unen estrechamente el aspecto privado de la propiedad y el público del señorío jurisdiccional; hombres y tierras se vinculan en una apretada y abigarrada malla de obligaciones y privilegios, que ligan y religan a señores, vasallos y siervos. La estructura feudal y el régimen nobiliario estarán directamente basados en la regulación de la tierra. Los letrados se educan en la ciencia romanista; el Derecho era para ellos, el del *Corpus iuris*, ... El Derecho de los campos, por el contrario, quedaba relegado por las costumbres, basadas en la desigualdad y en los privilegios; resulta así bárbaro y monstruoso, contrario y condenado por el *ratio iuris*. Clima reprobatorio de las anomalías de la regulación campesina, que se espesará aún más en el siglo XVIII, con el predominio de las ideas yustanaturalistas de libertad e igualdad. La revolución francesa es decisiva para la suerte del Derecho agrario. Con ella triunfan, y por ella se imponen en toda Europa, las ideas romanistas e yustanaturalistas, pero de tal modo y con tal energía, que su resultado será que el Derecho civil moderno haya vivido casi totalmente de espaldas a la realidad campesina...”

Aun así, el S. XIX, comienza con la promulgación de unas disposiciones, Decreto de abolición de los señoríos. Cádiz, 6 de agosto de 1811; Decreto de las Cortes 8 junio 1813 por el que se establecen normas para proteger el derecho de propiedad y fomentar la agricultura y ganadería (Consejo de Regencia 10 junio); Ley de abolición de los mayorazgos de 11 de octubre de 1820; Real Decreto de 19 de febrero de 1836 de desamortización de los bienes del Clero (Desamortización de Mendizábal), que libran a las tierras del peso muerto de unas cargas y trabas que eran nocivas para la economía agraria y para el bien común de la nación. Pero el cambio no sirvió para que se vertebrara

A finales del S.XIX, a falta de un régimen jurídico especial para la actividad agropecuaria y silvícola, únicamente contábamos con el recién promulgado Código Civil de 1889, que estaba lejos de ser un Código fundamentalmente agrario,⁵ pues a pesar de que a primera vista su lenguaje tuviese una terminología rústica,⁶ carecía de la necesaria visión de futuro que requería el Derecho Agrario,⁷ dado que el Código Civil se inspiró en una filosofía estrictamente liberal.⁸

una nueva y apropiada regulación agraria, sino que se extendió para el agro las disposiciones del Derecho común, un régimen uniforme concebido y pensado más bien para un ámbito burgués y urbano. La propiedad y las fincas son conceptos que se miden conforme a su valor en dinero, cegando cualquier hueco diferenciador basado tanto en elementos técnicos de la actividad agraria, como la justicia social y el interés de la economía de la nación,

(De Castro, 1954, añadiendo en la p. 380): “La indiferenciación de los bienes hace posible sustraer el campo a su finalidad primaria del cultivo y convertirlo en medio de inversión de capitales, instrumento de poder social del capitalismo y hasta objeto suntuario (coto de caza, dehesas para toros de lidia). En fin, la organización del Registro de la Propiedad lleva a que se fomente la llamada “movilización de la propiedad”: la tierra interesa como garantía de los créditos, como cobertura firme para los negocios de los prestamistas; las normas y la doctrina se ponen al servicio de la seguridad jurídica, de quienes sepan manejar el mecanismo del Registro, y parece que nada importa ya la suerte de quienes efectivamente cultivan la tierra”.

⁵ Contrariamente se ha dicho que nuestro Código Civil es un Derecho eminentemente agrícola, (Hernández 1943, p. 152).

⁶ Así (García, 2001, pp. 3 y ss.) señala que el legislador utiliza en el Código Civil frecuentemente términos como tierras, fundos, fincas, heredades, que evocan inmuebles de naturaleza rústica; también alude a actuaciones agrícolas como plantar o sembrar, así como la de incorporar pertenencias, instrumentos o accesorios para destinarlas de modo permanente a la explotación del fundo -vg. aperos, ganados, ...- o también el depósito de abonos destinados al cultivo de una heredad y situados en las tierras en que deben utilizarse.

⁷ Hay que señalar, sin embargo, que regula el retracto de colindantes en el art. 1523 tratando de resolver el problema de las fincas enclavadas cuyas dimensiones no superaban la Ha. de superficie; el art. 1056 permite al padre hacer su propia partición y atribuir a uno sólo de los hijos herederos la explotación agraria, abonando en metálico su legítima a sus hermanos; el art. 831, ...

⁸ Así lo pone de manifiesto la posición jurídica del arrendatario en relación con el arrendador propietario, que determinaba la extinción del contrato de arrendamiento rústico al expirar el término pactado -salvo tácita reconducción, fácilmente eludible por el arrendador- y que, además, en defecto de pacto en contrario, el contrato duraba un año o el tiempo necesario para que la finca diese sus frutos una sola vez. Con semejantes planteamientos no se incentivaba la realización de mejoras por el arrendatario, que no estaba, en general, protegido.

1. 1ª.-ETAPA: EL DERECHO AGRARIO COMO RAMA DEL ORDENAMIENTO QUE REGULA, FUNDAMENTALMENTE, LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.

El Código Civil concibe la actividad de producción agraria “como una forma de goce de los bienes”, prescindiendo del elemento diferenciador técnico-económico agrario.⁹ En el planteamiento del legislador decimonónico civilista, no hay en el Código Civil agricultores, ganaderos, silvicultores, sólo individuos. No hay Explotaciones Agrarias, sino fundos, fincas, predios ya que el Código estaba inspirado en un “liberalismo individualista templado”.¹⁰

“Todo el sistema del Código Civil descansaba sobre un fundamento liberal: la libre iniciativa se encargaría de proveer a las necesidades y conveniencias de los agricultores. El legislador se limitó a reconocer esa libertad ...limitándola, si acaso, débilmente”.¹¹

Por tanto, las disposiciones del Código Civil manifiestan una clara “despreocupación por lo agrario”¹² propia de las fechas de su promulgación, con escasas excepciones como, por ejemplo, la especialidad prevista para la explotación agraria en el artículo 1056 CC y la determinación contra el inconveniente agrario que supone el minifundio, previendo, como remedio, el retracto de colindantes previsto en el artículo 1523 CC.¹³

En este primer momento, la normativa agraria apenas se desvincula de la normativa del propio Código Civil. La referencia fundamental estaba en la propiedad de la tierra¹⁴ -y de los ganados-, en su titularidad o en sus derivaciones (derechos reales -usufructo, superficie, ...-, o derechos personales -arrendamientos, aparcería...-), o en la propia reorganización de la atribución del dominio (reforma agraria o de acceso a la propiedad,¹⁵

⁹ (Bassanelli, 1946, p.1)

¹⁰ (De Castro, 1949, p. 207).

¹¹ (Ballarín 1975, pp. 95 y 96). El mismo autor ha estudiado analíticamente el contenido jurídico agrario de nuestro Código Civil, (Ballarín, 1953 a, pp. 7-89)

¹² (De Castro, 1954, p.400).

¹³ Realizó un estudio en este sentido sobre el Código Civil, (Ballarín,1953 a, pp. 7-89).

¹⁴ (Bolla,1963, pp. 169 y ss.), veía en las cuestiones vinculadas a la tierra una primera y fundamental materia para que la agricultura se desarrollase de forma óptima.

¹⁵ (Luna 2006, pp. 16), pone de manifiesto como el Código Civil contiene formas de adquirir la propiedad típicamente agrarias, vg. art. 1523 CC, retracto de colindantes.

Esta primera etapa se prolongó en el tiempo con sus vestigios en algunos desarrollos legislativos hasta la década de los años 1990: Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el

o la reordenación de la misma por intercambios de titularidad de su base territorial, a través de las permutas de fincas rústicas).¹⁶

Así pues, las instituciones que en ese momento eran objeto del Derecho Agrario en España-su contenido-, se refieren básicamente a la propiedad de la tierra y a los bienes agrarios que a ella se conectan: fincas rústicas y los animales destinados al aprovechamiento de las mismas.¹⁷ Se trataba de regular fundamentalmente la propiedad de la tierra, del suelo rústico, de su determinación o su protección, su aprovechamiento y acondicionamiento para su explotación racional, mediante un adecuado suelo cultivable y las correspondientes mejoras fundiarias.

Esta concepción del Derecho Agrario no alcanza para abarcar totalmente todos los aspectos socioeconómicos del agro. Son precisas normas agrarias que vayan más allá de la tierra y el ganado. Esta concepción del Derecho Agrario en torno únicamente a la propiedad de la tierra, que no deja de ser una institución básica, evidencia limitaciones y conduce a un reduccionismo en la concepción del Derecho Agrario como un Derecho de la Reforma Agraria.

1. 2ª- ETAPA: SE EVOLUCIONA PASANDO DE LA ATENCIÓN EN EL FUNDO APROPIABLE A LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN AGRARIA.

En las primeras décadas del S. XX la cuestión agraria vive una nueva etapa normativa en aras de rectificar ese individualismo del Código Civil. Aparecen un cumulo de leyes bajo una influencia social y productivista, que traslucen la especialización en torno al naciente Derecho Agrario, que va más allá del “derecho de la redistribución de la tierra”.¹⁸

Advertido lo inadecuado de la regulación agraria de la época, algunos juristas vislumbran en el primer tercio del S. XX los resultados dañinos del

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario; la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma agraria andaluza; la Ley 1/1986, de 2 de mayo, de la Dehesa de Extremadura y la Ley14/1992, de 28 de diciembre, de patrimonio agrario de Aragón.

¹⁶(Luna, 2006, pp. 13 y ss.)

¹⁷ Todo ello se pone de manifiesto, entre otros, en los siguientes artículos de Código Civil: 326.2, 334, 354, 358, 359, 451, 452, 467, 472, 1491, 1554 y ss., 1575 y ss. y 1579.

¹⁸ Como defendió D. Felipe Sánchez Román en un curso en la Facultad de Derecho, Madrid, 1933-34, según pone de manifiesto (Ballarín 1975, pp.92).

Código Civil respecto de la economía del agro,¹⁹ patentes entre otras consecuencias en la atomización de la tierra y en su endeudamiento. El Derecho de sucesiones fragmentaba, generación tras generación, la pequeña y mediana propiedad, la de las familias ricas en hijos, generando más y más desigualdad social que conducía al sentir generalizado de la población rural de exigir urgentemente una Reforma Agraria.

La idea de que el agro debía de tener su propia regulación apropiada a su peculiar naturaleza, a su realidad económica y social, ya lo advirtió algún civilista. El Derecho Agrario lleva como presupuesto ineludible, al cambio del Derecho subsistente, el del Código Civil o de los Derechos forales o especiales.²⁰

Las normas nuevas sobre Derecho Agrario revelaban un espíritu distinto que el de las del Código Civil. La evolución en la materia se dirige a una progresiva modificación de los planteamientos individualistas propios del Código Civil.²¹

Se supera la etapa anterior centrada básicamente en la propiedad de la tierra -aspecto estático- para poner el acento como objeto del Derecho Agrario en el aspecto dinámico de la actividad económica de producción agraria.²²

Se supera, aunque no totalmente, la concepción del Derecho Agrario como derecho de la propiedad de la tierra, ya que pervive la legislación de la reforma agraria, contemplando suelo rústico como el medio de producción sobre el que se ejerce la actividad de producción agraria.²³ Se trata de configurar el objeto del Derecho Agrario sobre la base de la Explotación Agraria o más ampliamente sobre la Empresa Agraria.²⁴

¹⁹ (De Castro 1954, p.381)

²⁰(De Castro, 1954, p.389), señaló los distintos grupos normativos que están vigentes respecto al campo: “1º. Las disposiciones del Código Civil y de la Ley Hipotecaria en vigor...2º. Disposiciones de urgencia ... leyes de arrendamientos rústicos, aparcería, rabassa morta. 3º. Disposiciones liquidadoras del antiguo régimen (reforma agraria, expropiación, parcelación) ... 4º. Disposiciones para establecer un régimen normal y justo del campo (leyes de patrimonios familiares y de concentración parcelaria)”.

²¹ (Valverde 1909, p. 10), señala entre las normas desgajadas del Código Civil, lo que llama “legislación rural”.

²²(Bolla, 1963, pp. 169 y ss.), señala que junto al fundo toma forma y se diferencia la hacienda como centro de actividad económica y social.

²³ La actividad agraria definida en base al concepto del ciclo biológico, se considera la esencia del Derecho Agrario y cuenta con el máximo difusor en (Carrozza, 1988, pp. 1153 y ss.); (Carrozza,1988), (Carrozza,1992, pp. 392 y ss.

²⁴ Noción de muy escasa precisión a juicio de (Luna, 2002, p.733).

Tras la Primera Guerra Mundial, las convulsiones políticas y las preocupaciones económicas y sociales alcanzan al agro.²⁵ En España, se inicia, con fines sociales, una tendencia para sustituir, en parte, el liberalismo individualista por un cierto dirigismo estatal.²⁶

Fruto de la preocupación por la lucha contra el minifundio, y con base en nuevos planteamientos económicos y sociales, una de las primeras reformas afectó al régimen de propiedad de la tierra. Mientras que para el Código Civil la finca rústica debía reputarse siempre cosa divisible, la reforma impone su indivisibilidad para evitar la fragmentación sucesiva de los predios y sus nefastas consecuencias para la producción agraria²⁷.

Así, en el ámbito social, la cuestión agraria se orienta hacia una más justa distribución de la propiedad rústica, dictándose la Ley de Parcelaciones de 1927 que fomenta el acceso a la propiedad de los productores agrarios, para esa más justa distribución de la propiedad.

En el ámbito del arrendamiento rústico, el artículo 9 del Real Decreto Ley de 21 de noviembre de 1929 establece que los contratos podrán ser prorrogados a voluntad del arrendatario por una sola vez y por un periodo igual al de su duración mínima²⁸. Además, el artículo 11 del mismo texto legal disponía que el adquirente de una finca rústica dada en arrendamiento queda obligado a respetar el contrato de arrendamiento, frente el viejo principio del Código Civil, artículo 1571: venta quita renta (*emptor non tenetur stare colono*). En este mismo texto legal (artículos 15 a 18), con afán productivista, se regulan las mejoras, apartándose de los principios del Código Civil, concediendo al arrendatario el derecho a reclamar, al finalizar el arriendo, el abono de las mejoras útiles por él introducidas en la finca.

Con la aprobación de la Constitución Española de 1931, tratando de vincular la Explotación Agraria a la familia y garantizar su permanencia, se adquirió el compromiso de realizar la Reforma Agraria²⁹, que no se

²⁵ (Ballarín 1951, pp. 299 a 324).

²⁶ Vg. el empleo de semillas seleccionadas para el cultivo del trigo, (Del Castillo y Pajarón, 1932).

²⁷ Art.5 de la Ley de 30 de agosto de 1907 -y su Reglamento de 1918- de colonización y repoblación interior.

²⁸ Sobre este texto legal vide (Pérez y Serrano 1951, p. 21).

²⁹ Artículo 47: La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación.

pudo llevar a cabo al estallar la Guerra Civil en 1936, si bien sirvió para reforzar el interés por el Derecho Agrario³⁰. En cambio, si hubo tiempo de aprobar la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1935, siendo, quizá, el arrendamiento de predios rústicos la figura jurídica en que se reflejan más claramente las diferentes concepciones sobre la situación jurídica del agro: se garantizan las prórrogas forzosas del contrato, se concede el derecho de retracto, se regulan las mejoras para hacerlas más interesantes para el arrendatario³¹.

Tras la Guerra Civil se genera una mayor producción normativa agraria impulsando la nueva disciplina del Derecho Agrario destacando, cada día más, sobre el fondo del Código Civil.

Toda la legislación colonizadora del régimen político de Franco³² (al frente estaba el Instituto Nacional de Colonización) se dirigió a la creación de Explotaciones Agrarias rentables. El régimen aprobó numerosas leyes

La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.

La Ley relativa a la Reforma Agraria se publicó en: «Gaceta de Madrid» núm. 265, de 21 de septiembre de 1932, páginas 2095 a 2102, Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. BOE-A-1932-7320. Se crea el Instituto de Reforma Agraria.

³⁰ Se aprobó también la Ley de Obras de puesta de riego de 1932, para realizar planes de transformación que comprenderían no solo obras hidráulicas, sino también la construcción de caminos, nuevos poblados, ... La vigencia de esta Ley fue muy escasa y no se tradujo en realidades.

³¹ En materia de Contratos Agrarios, los principios de la Ley de arrendamientos rústicos de 15 de marzo de 1935 (reformada por las sucesivas leyes de 28 de junio de 1940, 23 de julio de 1942 y 4 de mayo de 1948) consistían en estabilizar al arrendatario en el arrendamiento, garantizándole una cierta duración (establece la prórroga obligatoria solo para el dueño de la finca), y frente a la oscilación de las rentas, aseguró la aplicación del índice oficial de los precios de los productos agrarios, se contempló el derecho de retracto arrendaticio para permitir al arrendatario convertirse en propietario de las fincas arrendadas cuando el propietario de las mismas se las vendiese a extraños, abonando el precio pagado por el comprador.

En el artículo 6 de la Ley de 28 de junio de 1940, que modifica la Ley de arrendamientos rústicos de 1935, al referirse al cultivador directo dice que: “se entenderá por explotación directa aquella en que el propietario de la tierra asuma los riesgos totales de la empresa agrícola, sufragando los gastos a que la misma dé lugar”. Se utiliza el término empresa agrícola por primera vez en nuestro Derecho, sobreponiendo la estimación de la actividad productiva agraria a la titularidad del derecho de propiedad, superándose el concepto de finca rústica como parcela de tierra cultivable por el de actividad agraria productiva de la Explotación.

³² Así, por ejemplo, la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad en las zonas regables, de 1 de abril de 1949.

agrarias.³³ La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, la creación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la legislación de Arrendamientos Rústicos, entre otras, desvelaron una conciencia del legislador de la época por encima del propio Código Civil y de los mismos Derechos Forales.³⁴

Se desgaja de aquel tronco común civilista cierta normativa propia del régimen jurídico de la actividad agraria a partir de una corriente legislativa con unos planteamientos más sociales para el campo. Según entiende (Ballarín, 1975, p. 94), el nuevo Derecho Agrario se fue edificando a golpe de leyes especiales sobre el solar- viejo solar- del Código Civil y “tiene por objeto regular las empresas agrarias para aumentar su capacidad productiva y su estabilidad social”.³⁵

³³ La Ley de Explotaciones agrarias ejemplares de 1952 (que señala en el artículo 2 los diferentes elementos que componen la Explotación agraria, y en el artículo 3 realiza una enumeración de las actividades agrarias), la Ley del Patrimonio Familiar de 1952, patrimonio que debe servir de soporte a una familia campesina, formando una unidad jurídica indivisible, inembargable y que no responde de las deudas del titular- artículos 3, 6 y 10-; y la Ley de Concentración Parcelaria de 1952, que pretende reorganizar las Explotaciones agrarias, modificando el derecho de propiedad que esté en la base de la gran mayoría de ellas (Ballarín 1953b, pp. 69 a 91), se crean, según el artículo 3, las unidades mínimas de cultivo, se impone la concentración parcelaria para acabar con las parcelas de extensión inferior y para asignar a cada propietario en coto redondo o en un reducido número de parcelas el equivalente de lo que poseía -artículo 4-. La Ley de Fincas manifiestamente mejorables de 3 de diciembre de 1953, encaminada a promover al máximo el rendimiento económico de las tierras incultas o mal explotadas, fomentando las mejoras, (Leal 1954, pp. 175 a 196).

³⁴(García 2001, p.6 “Al haberse prescindido totalmente del régimen arrendaticio del CC, la legislación agraria, basada en la propiedad y en posesión de las tierras, se revistió de una tonalidad social”)

³⁵ (Ballarín, 1975, p. 94). (De Castro 1954, pp.383, 384 y 385, p. consideró que “en la afanosa búsqueda del carácter distintivo del Derecho Agrario se ha creído encontrar una solución utilizando el concepto de empresa. Recogido de la doctrina mercantil, no puede sin más ser aceptado para lo agrario, que por su origen y objeto es tan diferente del tráfico comercial”. Aparte de definir el contorno de empresa, parece innegable que se encontrarán mayores obstáculos aún para considerar a la empresa agraria como materia única, exclusiva o principal del Derecho Agrario, por tener un significado secundario para la agricultura, “y así las manifestaciones propias de la empresa...serán normalmente extrañas a la explotación agraria. Por ello no parece posible considerar a la empresa como materia única, ni siquiera como símbolo del Derecho Agrario... admitir que el derecho agrario es el Derecho de las empresas agrícolas, sería aceptar, al menos parcialmente, la mercantilización del campo; ello significaría, parece, desconocer que la naturaleza de la agricultura requiere una regulación distinta de la comercial y apropiada a su propia naturaleza”)

En el ámbito del Derecho Agrario se advierten ideas fuerza que no jugaban en otros ámbitos del Derecho Privado: las preocupaciones productivista y social que habían sido indiferentes al civilista puro³⁶. A pesar del carácter obligatorio de las normas del Derecho Agrario, y aunque en su ámbito se hubiese restringido notablemente la libertad contractual, el Derecho Agrario no ha pasado a ser Derecho público³⁷, sino que ha de considerarse “como una rama especializada por su materia ... del Derecho civil o Derecho privado general”,³⁸ sin ser una disciplina independiente tal como aparece, entre otros, el Derecho Mercantil.

(Ballarín 1979, 695 p.). define el Derecho Agrario español del momento como “sistema de normas, tanto de Derecho privado como de Derecho público, especialmente para regular el estatuto del empresario, su actividad, el uso y la tenencia de la tierra, las unidades de explotación y la producción agraria en su conjunto, según unos principios generales, peculiares de esta rama jurídica”.³⁹ En cuanto a su naturaleza, el mismo autor entiende que en el Derecho agrario se combinan funcionalmente el Derecho privado y el público al ser posible la consideración sistemática de que tales normas convergen a los mismos fines y los principios especiales que las informan son idénticos (entre otros, la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales renovables, la promoción del medio rural, el sostenimiento de precios y políticas de rentas, la mejora de las estructuras agrarias, concordar las titularidades agrarias con la función social de la propiedad...)

Para Ballarín, la empresa agraria es una unidad de producción constituida por el empresario y colaboradores. Tierra y otros elementos organizados, mediante los cuales se ejercita a nombre de aquél una actividad agrícola, ganadera, forestal o mixta y las conexas de transformación y comercialización, con o sin finalidades lucrativas.

³⁶ (Ballarín, 1975, p. 119, el Derecho agrario si ha de alcanzar esas finalidades “no puede ser más que un Derecho de la empresa” más o menos intervencionista. En la p. 120 señala: el Derecho agrario en España es aquel “que regula las empresas agrarias, fomentando su capacidad productiva y su estabilidad social”, definición de clara influencia de la doctrina italiana del momento, (Longo, 1952, p. 7 y Cascio, 1952, p. 22, define el Derecho agrario como “el conjunto de normas jurídicas que regulan la empresa agraria”).

³⁷ (Ballarín 1975, p. 123. En su mayor parte, dice en la p. 124, es “un verdadero Derecho privado, ya que sigue creyendo en el valor creador de las energías individuales, abriendo oportunidades a la iniciativa de los titulares de las Explotaciones Agrarias”).

³⁸ (De Castro 1954, p. 399).

³⁹ (Ballarín 1979, 695 p.).

Por tanto, el Derecho Agrario no puede ser considerado una disciplina jurídica básicamente integrada en el Derecho Civil, ya que como se desprende de la obra científica del propio Ballarín, el sector productivo agrario modernizado y homologable con otras actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios propios de una economía moderna, requiere entrar a analizar aspectos diversos y distantes del propio Derecho civil y que alcanza, entre otros, una dinámica de los mercados de origen, la política de precios agrarios, otros aspectos agroalimentarios y de sanidad alimentaria, todo ello en el marco de una actividad agraria sostenible y compatible con la con la conservación del medioambiente.

En la década de los sesenta y setenta - antes de la Constitución de 1978-, se aprueban numerosas leyes agrarias⁴⁰ de decisiva influencia en el agro.

En definitiva, en la década de los setenta en España, antes de la Constitución de 1978, existe un afán de abordar de modo global la disciplina y replantearse sus coordinadas principales⁴¹, que pretenden superar la perspectiva de parte de la doctrina jurídica que aún negaba, sino la existencia, al menos la autonomía del Derecho Agrario, reconociendo si acaso la existencia de normas especiales agrarias en el marco del Derecho público o privado.⁴² Frente a éstos, encontramos a quienes sostienen la existencia separada y autónoma de la disciplina, aunque teñida del Derecho civil,⁴³ pero con caracteres propios y una sistemática abierta y horizontal.⁴⁴

⁴⁰ Entre otras, se aprueban la Ley de Ordenación Rural de 1968, el Texto Refundido de la Seguridad Social Agraria de 23 de julio de 1971, la Ley sobre Comarcas y Fincas Mejorables de 1971, La Ley creadora del IRYDA de 1971, la fundamental Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 y la Ley de Cooperativas de 1974.

⁴¹ Así, a modo de muestra (De los Mozos 1972, 332 p.)

⁴² (Hernández, 1971, pp. 91 a 97).

⁴³ Las Jornadas Italo-Españolas de Derecho agrario celebradas en torno a las Cátedras de Derecho Civil de las Universidades de Valladolid y Salamanca, en 1972, supusieron una revisión científica de la disciplina superando los aspectos trasnochados como un Derecho “de la reforma agraria”, de la propiedad agraria con un trasfondo romanista propio de nuestro Derecho civil. Son destacables, entre otros, las aportaciones de Luna Serrano, Sanz Jarque y De los Mozos (éste último en el seno del Instituto Universitario de Derecho Agrario impulsado por Ignacio Serrano Serrano).

⁴⁴ Al modo que para este propósito lo refiere (Alonso 1973, pp. 809-826).

Se trataba de determinar el objeto del Derecho Agrario- al que referir sus normas y sobre el que construirlo científicamente-, determinar su contenido y sus conceptos básicos.⁴⁵

En definitiva, en esta segunda etapa, el objeto del Derecho Agrario en España comprende no solo los bienes agrarios -en particular, el fundo-, sino que también los productos agrarios, los contratos agrarios, pasando a ser una componente esencial del objeto de la materia, la actividad de producción agraria en conexión con los aspectos anteriores. Además, será preciso con el devenir del tiempo superar este concepto esencial como objeto del Derecho Agrario a través de la conectividad de otras actividades complementarias a la agraria -conexas-, como pueden ser la comercialización, la transformación, la manipulación y conservación de la producción agraria.⁴⁶

1. 3ª.-ETAPA: DESDE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 Y LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA UNIÓN EUROPEA HASTA LA ACTUALIDAD.

1.-La concepción del Derecho Agrario hasta llegar a este tercer momento, se basada en que la actividad agraria pivota sobre la explotación y los medios de producción. Se centraba en las relaciones jurídicas que interesan a la producción agraria organizada por el titular de la Explotación Agraria,⁴⁷ orientando su objeto más allá de la Reforma Agraria, a los aspectos técnicos en aras de una mejora y más rentable productividad agraria,⁴⁸ a los contratos agrarios,⁴⁹ así como al desarrollo de otras actividades complementarias.⁵⁰

⁴⁵ Se había venido situando ese objeto sobre todo en la propiedad fundiaria (fundo agrícola), en la reforma agraria y en la empresa agraria (empresario agrario), si bien todos ellos habían quedado estrechos para la edificación de esta disciplina jurídica. La propiedad fundaría había cambiado sentido último respecto al que tuvo para el viejo Derecho civil liberal individualista. Por su parte, la empresa agraria, tiene un concepto evanescente que no puede representar la especificidad jurídica del Derecho agrario.

⁴⁶ En este sentido, en la doctrina italiana, (Casadei, 2001, p.723. Goldoni, 2002, pp.213 y ss. 2002,).

⁴⁷ (Luna 2002, p.733).

⁴⁸ Vg. a través de la Concentración Parcelaria, de las Unidades Mínimas de Cultivo y el Derecho sucesorio agrario.

⁴⁹ Así, el crédito agrario, los seguros agrarios y las mejoras en los arrendamientos rústicos.

⁵⁰ Artesanales, agroturismo, ...

Se inicia una nueva etapa en la que la configuración del Derecho Agrario sigue girando en torno a la actividad agraria, colocando a ésta en relación, por una parte, con la organización del territorio –a través de leyes de planificación territorial y protección del suelo rústico, regadío, e infraestructuras viarias-; y por otra parte, desde esta concepción, se imbrica a la actividad agraria con la protección del ambiente, ya que en la susodicha actividad se implican no pocos recursos naturales en el propio proceso de producción agraria, a la vez que resultan afectados por ésta. Por ejemplo, la contaminación del agua afecta a la actividad agraria, y a su vez, ésta puede provocar la propia contaminación de las aguas subterráneas por medio de abonos o plaguicidas... Así, se aprueban leyes de protección de la flora y fauna silvestre, protección del suelo agrario, leyes forestales⁵¹, protección de la cubierta vegetal, aprovechamientos de pastos, ...⁵²

El objeto del Derecho Agrario quedaría limitado si nos ceñimos exclusivamente a la actividad de producción agraria. Por eso hemos de tener presente que, a través de la idea de conexidad, el objeto del Derecho Agrario se abre, no sólo a la regulación de ciertos bienes agrarios (cosas útiles o de uso necesario en el desarrollo de la propia actividad agraria), sino también a la regulación de otros elementos particularmente útiles para la misma, como por ejemplo las semillas, los agroquímicos, las máquinas... que tienen también una conexión directa con la actividad agraria.

La Constitución de 1978 parece pasar de puntillas sobre el tema agrario al establecer unos principios de alcance general sobre el particular. En su título VII dedicado a “Economía y Hacienda” se encuentra un único artículo, el 130, referido específicamente a la agricultura: “1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.” Sin embargo, este aparente poco comprometido precepto constitucional ha posibilitado el impulso de la política agraria española en los aspectos más relevantes del Derecho Agrario español del presente.

⁵¹ (Muñiz, 2025).

⁵² (Pastorino, 2024, pp. 17 a 36), concretamente pp. 22 a 26, y en la p. 31, afirma que existe la necesidad de complementar el objeto del Derecho Agrario más que en la sola actividad de producción agraria, en el binomio compuesto por la misma y los bienes agrarios.

En el ámbito competencial del Estado sobre la materia la recoge el artículo 149 .1. 13.^a según la cual el Estado posee competencia exclusiva respecto a las “bases y coordinación general de la actividad económica”, y además el art. 149. 1 . 23.^a, añade, así como la competencia exclusiva sobre la “legislación básica sobre protección del medio ambiente”.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas cuentan con poder legislativo dentro de su ámbito territorial y de aquellas competencias que les atribuyen la propia Constitución y su Estatuto de Autonomía. Entre las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas se encuentra la relativa a la agricultura y ganadería -art. 148. 1.7.^a- de acuerdo con la ordenación general de la economía; la gestión de la protección del medio ambiente -art.148.1. 9.^a-, compartida con el poder central del Estado. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la CE y en sus respectivos Estatutos de Autonomía, las Comunidades Autónomas han ido asumiendo competencia en materias relativas a la ordenación del territorio, montes y aprovechamientos forestales, proyectos, construcción y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial.

Por todo ello, las Comunidades Autónomas han aprobado numerosa normativa en la materia, ajustada a sus propias necesidades y de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y del Estado.

La legislación agraria es un ejemplo paradigmático del pluralismo normativo: la actividad productiva agraria está sujeta a normas de las Comunidades Autónomas, del Estado poder central y de la Unión Europea, e incluso a la normativa de los Tratados Internacionales de la Organización Mundial del Comercio.⁵³

Además, España, desde el 1 de enero de 1986 se ha integrado en la Unión Europea, por lo que toda la normativa comunitaria referida a la Política Agraria Común (PAC) forma parte de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Con la adhesión de España a la Unión Europea y con el fenómeno de globalización económica, el objeto del Derecho Agrario alcanza mucho

⁵³ Se aprueban, entre otras, las siguientes Leyes: Ley 87/1978, de 28 de diciembre , de seguros agrarios combinados; Ley 34/1979, de 16 de noviembre de fincas manifiestamente mejorables; Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común; Ley 87/1980, de 31 de diciembre de arrendamientos rústicos; Ley 25/1982, de 30 de junio, de agricultura de montaña; Ley 43/2002, de 20 de noviembre de sanidad vegetal; Ley 8/2003, de 24 de abril de sanidad animal y Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

más allá de la actividad productiva agraria, también llega hasta la puesta en el mercado del resultado de la propia actividad agraria: la normativa sobre comercialización de los propios productos agrarios, la normativa referida a la contratación de los mismos⁵⁴, a los acuerdos interprofesionales, a las organizaciones comunes de mercado, a los aspectos de los precios de intervención y otros aspectos del mercado, cuotas de producción, así como a las indicaciones de calidad en los productos agrarios -DOP e IGP, ETG-.⁵⁵

La PAC 1962-1992 se centró en un complejo sistema de fijación de precios, compras de excedentes y subsidios para el almacenamiento y las ayudas a las exportaciones. Desde el año 1992, el nivel de sostenimiento de los precios en los mercados se ha reducido gradualmente y se han introducido progresivamente transferencias directas de ingresos para amortiguar las pérdidas de ingresos de los agricultores. Así, con las reformas de la PAC, los apoyos directos se desvinculan de la producción y se vinculan cada vez más al cumplimiento de los requisitos ambientales, climáticos, sanitarios y de bienestar animal.

⁵⁴ (Muñiz, 2024)

⁵⁵(Luna 2002, p.738).

España, en el ámbito estatal, se han dictado leyes relativas a los contratos agrarios, a la modernización de las Explotaciones Agrarias, a favorecer el asociacionismo agrario, al relevo generacional y rejuvenecimiento del sector agrario, al acceso de la mujer a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, a la mejora en la cadena alimentaria y al control alimentario, a la protección medioambiental, ... Ley de arrendamientos rústicos de 1980 y Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos; Ley 34/1979, de 16 de noviembre, sobre fincas manifiestamente mejorables; Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las Explotaciones Agrarias y Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titularidad compartida de las explotaciones agrarias; Real Decreto 1776/1981, que aprueba el estatuto regulador de las SAT, Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas y la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario; Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes; Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible en el medio rural; Ley 2/2000, de 7 de enero de contratos-tipo de productos agroalimentarios; Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria-modificada por Ley 16/2021; Ley 28/2015, de 30 de junio, de defensa de la calidad alimentaria; Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas del ámbito territorial supraautonómico; Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición; Ley 30/2006, de 26 julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos y Ley 43/2002, de 20 de noviembre de sanidad vegetal. Un repaso de esta legislación lo realiza (Amat 2023, pp. 185 a 241).

La PAC propugna un difícil equilibrio socioeconómico a conseguir mediante una compleja y cambiante regulación que pretende fomentar la producción agraria, estabilizar los mercados, garantizar los abastecimientos, el aseguramiento de un buen nivel de vida de los agricultores y la obtención por el consumidor de alimentos a precios razonables.⁵⁶ Así, se han aprobado, entre otras, normas sobre: derechos de producción, intereses de consumidores, calidad y seguridad alimentaria, responsabilidad civil por daños causados por productos agrarios defectuosos. Además, se ha añadido como referencia básica de la disciplina el “Desarrollo Rural” -uno de los pilares de la PAC, junto con el de la estructura productiva y el de organización del mercado de los productos agrícolas-.⁵⁷

En la actualidad, la PAC pivota sobre tres puntos de apoyo:

1º.- La competitividad del sector agrario de la Unión Europea y así lograr garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Para ello, se tiene que mejorar no solo al acceso, sino también el uso del conocimiento, de la innovación y de la digitalización.

2º.-Una dotación presupuestaria suficiente, que ayude al relevo generacional en la actividad agraria, dotando de los instrumentos necesarios para lograr practicas agrarias sostenibles socioeconómicamente y también medioambientalmente. Para ello se establecen incentivos para compensar a los productores agrarios por sus aportaciones medioambientales, en la lucha contra el cambio climático (prioridad política) y en la sensibilización sobre el bienestar animal.

3º.-Reforzar las herramientas de gestión de riesgos:

a) Climáticos -sequías, inundaciones, heladas...-, que afectan al agua, a la tierra/suelos y a la masa vegetal.

⁵⁶ (Luna, 2006, pp.18 y ss.)

⁵⁷ En la Unión Europea, el sector agrario ocupa el 4% de la población, la cual gestiona el 90% de su territorio, siendo un sector estratégico como productor de alimentos. La PAC, una vez superada la etapa en que se apoyaba a los productores agrarios por hectárea cultivada o por cabeza de ganado, funcionó el criterio del desacoplamiento de la producción, apoya al productor agrario, pero reforzando la protección ambiental a través de la llamada condicionalidad y los eco-regímenes. La sostenibilidad es el modelo para el sector agrario, buscando la neutralidad climática, mediante el freno del cambio climático. Para ello, se combina, por un lado, la obligatoriedad de la condicionalidad –el 90% de la superficie agraria ha de respetar los requisitos medioambientales fijados en la PAC-. Por otra parte, a los eco-regímenes, que son voluntarios a través de incentivos -eco esquemas-, queda sujeta el 10% de la superficie.

b) Económicos (procedentes de conflictos bélicos, pandemias, ...) y comerciales, esto es generados por importaciones procedentes de terceros Estados que generan crisis de precios y de mercados. Además, se ha de mejorar la posición de los productores agrarios en la cadena agroalimentaria ante los riesgos que les amenazan, para lo cual habrá que crear, entre otros mecanismos, seguros, fondos mutualizados y acceso a la financiación.

Por otra parte, habrá que estabilizar los ingresos de los productores agrarios con ayudas directas a las rentas para mantener una productividad agraria viable, en particular en las Explotaciones Agrarias Familiares, en todo caso, reduciendo los trámites burocráticos.⁵⁸

Si tenemos presente que la producción agraria es una parte esencial de la sociedad y seguridad europea, el futuro del sector agrario pasa por ser diverso, competitivo y sostenible socioeconómica y ambientalmente.

Se ha cambiado el papel de los agricultores en la sociedad y la relación con el Estado. Originariamente se tenía un sistema de control sobre el uso adecuado de los fondos Unión Europea por parte de los Estados miembros. Ahora lo que se pretende es controlar la voluntad de los agricultores para gestionar sus explotaciones agrarias de acuerdo con las expectativas y estándares sociales. Este modelo de recibir pagos directos proporciona a la Unión Europea y a los Estados una gran influencia para implementar prácticas ambientales y de bienestar animal, lo que afecta a la independencia y libertad de muchos agricultores para maximizar la producción.

2.-Seguidamente expondré las especialidades más llamativas del objeto del Derecho Agrario, como expresión normativa de una determinada Política Agraria en un momento histórico, realizando un recorrido por el objeto de la disciplina actualmente.

El Derecho agrario como conjunto de normas por las que se concreta la política agraria de cada época, arrastra consigo una gama de postulados políticos y económicos cuyas soluciones pasan así a integrarse en las propias disposiciones normativas, otorgando un cierto carácter coyuntural al objeto del Derecho Agrario. Así, éste se sucede en el tránsito de la propiedad de la tierra como objeto del Derecho Agrario a pasar a serlo la Explotación Agraria, y la producción agraria y al comercio de los

⁵⁸ Actualmente la mayor parte del presupuesto de la PAC se destinan a los pagos directos por superficie cultivada condicionada a la protección del medio ambiente, consumidores y salud animal.

productos agrarios, y a la protección del medio ambiente, y al desarrollo rural...⁵⁹

Las vertientes que integran hoy el objeto del Derecho Agrario se irradian hacia los más variados sectores del Ordenamiento Jurídico, abarcando el estudio de un conjunto de normas muy amplio y heterogéneo, no sólo de Derecho Civil, sino también de Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho Laboral y Derecho Financiero, entre otros, poniendo de manifiesto un carácter transversal de la materia, sin perjuicio del papel destacado que, dentro de ese agregado normativo, tiene las instituciones básicas de Derecho Privado -vg. Propiedad, contratos, ...-

El recorrido por el objeto de la disciplina actualmente comienza por:

-La Propiedad agraria y otros derechos reales. La primera es una institución fundamental del Derecho Agrario, cuyo régimen básico es el del Derecho Común, sin perjuicio de sus especialidades agrarias. La propiedad agraria participa del carácter de propiedad ordinaria del artículo 348 CC, no de una propiedad especial ya que carece de un estatuto propio cuyas facultades de uso, disfrute y disposición, limitaciones y formas de ejercicio estén moduladas por una legislación especial.

Ahora bien, la consagración de la propiedad privada y de su función social -art. 32 CE 1978- unida a la incorporación del Reino de España a la Unión Europea, abre un enfoque especial ligado inexorablemente a la protección del medio ambiente, el desarrollo rural..., sin dejar atrás los aspectos productivos.

En relación con otros derechos reales, mencionar el usufructo, con las especialidades del usufructo de montes -art. 485 CC-, usufructo de viñas y olivares -art. 483 y 489 CC- y el usufructo de ganados -art. 499 CC-.

En cuanto al Derecho de superficie rústica,⁶⁰ ha crecido su importancia en los últimos años, al incentivarse determinados tipos de explotaciones forestales y la instalación de placas solares como energía alternativa.

Por último, en cuanto al retracto de colindantes, el artículo 27 de la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de Explotaciones Agrarias, que tiene un objeto diferente al retracto de colindantes del artículo 1523 CC y al que no ha derogado. El primero no es sino una especialidad del

⁵⁹ Sobre la evolución y objeto del Derecho Agrario (Sánchez 2002, pp. 1107-1138).

⁶⁰ (Sánchez, 2023, pp. 659 a 698).

retracto frente al retracto del Derecho Común, existiendo ambos retractos legales en nuestro Ordenamiento Jurídico.⁶¹

- *Las Leyes de Reforma y Desarrollo agrario*, ante la difícil tarea de adaptarlas a la Constitución Española y a la normativa de la Unión Europea, contienen muchas y diversas instituciones han caído en desuso: redistribución de tierras -artículos 20 y ss. de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973-, la transformación de grandes zonas -art. 92 y ss. de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973-, la ordenación de explotaciones y comarcas mejorables -art. 128 y ss., art. 140 y ss. de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973-, la propia Ley 34/1979, de Fincas Manifiestamente Mejorables, la permuta forzosa de fincas rústicas -art. 261 y ss. de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973-. No debemos olvidar cierta legislación autonómica referida a la reforma y desarrollo agrario, que también han caído en desuso.

Existen instituciones que siguen teniendo actualidad en el marco de las medidas encaminadas a la formación de Explotaciones Agrarias viables: la Unidad Mínima de Cultivo y la concentración parcelaria.⁶²

- *Empresa Agraria, Explotaciones Agrarias, Sociedades y Cooperativas Agrarias*. El rasgo distintivo de la Explotación Agraria radica en el tipo de actividad económica que ejercita su titular: actividad agraria que comprende tanto la producción u obtención de productos agrarios como su transformación y comercialización, junto a las actividades complementarias que se asimilan a la actividad agraria⁶³ -art. 2 Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995-.

Dentro de las Explotaciones Agrarias, se encuentran las prioritarias, que son aquellas en las que concurren unos requisitos mínimos de dimensión económica y de profesionalidad del titular, que las hacen merecedoras de una protección acentuada y a la que se confiere preferencia para la obtención de determinadas ayudas públicas -artículos 7 y 8 a 12 de la Ley 19/1995-.

En cuanto a las Sociedades y Cooperativas agrarias, se trata de Explotaciones Agrarias colectivas: sociedades civiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas Agrarias, sociedades

⁶¹ (Sánchez, 1997a, pp. 27 a 43).

⁶² (Sánchez 1997b, pp. 337-349) y (Sánchez, 2007, pp. 253 a 265).

⁶³ (Sánchez, 2003, pp. 216 y ss.)

mercantiles, sociedades laborales y supuestos de índole concursal, en las que se agrupan los productores agrarios a diversos efectos.

.- *Aguas, montes y pastos*. Estamos ante aspectos claves para la comprensión multifuncional de la actividad agraria y claves para un desarrollo rural sostenible.

El agua es un elemento vital para la actividad agraria, pero en su utilización para fines agrarios hemos de tener presente su implicación ambiental.⁶⁴ El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA -Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), se ha adaptado a la normativa europea que obliga, como medida esencial respecto del regadío, al control de los consumos de agua basados en ratios de referencia por cultivos.

Se han previsto unos supuestos excepcionales -art. 5.1 y 2 TRLA- de titularidad privada, como excepción al principio básico de la demanialidad -art. 1 TRLA-, que no ha de confundirse con el uso privativo de las aguas por el que un particular puede utilizarlas privativamente por disposición legal o administrativa⁶⁵ -artículos 50.1, 52 y 54 TRLA-. El agua es un bien de dominio público, el ciclo hidrológico del agua es demanial, la propiedad privada del agua en España es testimonial. Existe un mercado del agua, pero de concesiones administrativas del uso privativo del agua.

En cuanto a los montes, aunque se aprovechen para actividades agrarias, no se debe olvidar sus importantes funciones ecológicas y paisajísticas. Su regulación es un claro ejemplo de la función medioambiental de la propiedad como manifestación de su función social. El eje central de la Ley 10/2006, de 28 de abril, de montes, Ley estatal -que modificó la Ley 43/2003, de 21 de diciembre-, se encuentra en el Principio de gestión forestal sostenible, esto es, compaginar la conservación y aprovechamiento de los montes de forma ordenada con el interés socioeconómico y medioambiental.⁶⁶

Por su parte, los pastos constituyen un aprovechamiento de los predios rústicos y están regulados en el Código Civil – artículos 600,603 y 604- y en la legislación especial estatal y autonómica.⁶⁷

⁶⁴ (Sánchez 2005a, pp. 279 a 307).

⁶⁵ (Sánchez, 1998a, pp. 336 a 371).

⁶⁶ (Sánchez, 1998b, pp. 381 a 422).

⁶⁷ (Sánchez 2005b, pp. 201 a 276).

- *En apartado de los contratos agrarios*, destacaré el contrato de arrendamiento rústico, el de crédito agrario y el de seguro agrario. El régimen jurídico de los arrendamientos rústicos en el Código Civil, basado exclusivamente en la libertad contractual, no sirvió para hacer frente a las nuevas necesidades socioeconómicas del S. XX. La Ley de Arrendamientos Rústicos de 1935 y las sucesivas reformas de las décadas siguientes sirvieron para reforzar la estabilidad del contrato por medio de la prórroga forzosa para el arrendador y facultativa para el arrendatario, al tiempo que se controlaron las rentas y facilitó el acceso a la propiedad. Tras la importante Ley de arrendamientos rústicos de 1980, en la actualidad está en vigor la Ley 49/2003, de arrendamientos rústicos, contratos agrarios cuya causa específica se encuentra ligada a la actividad agraria de producción. En la Ley se incluyen, no sólo los contratos de arrendamientos de fincas rústicas, sino también los arrendamientos de explotaciones agrarias.⁶⁸

Por otra parte, la aparcería agraria es un contrato por el que una de las partes concede a la otra el disfrute de ciertos bienes o elementos de una Explotación Agraria a cambio de una parte de los frutos, productos o rendimientos que la misma produce, contraprestación, que, por su aleatoriedad, puede no ser ejecutada porque no se haya generado producción o beneficios que partir -art. 28.1 de la Ley de arrendamientos rústicos de 2003-.

Regular la aparcería al lado del contrato de arrendamiento, supone una cierta aproximación entre ambos a pesar de sus diferencias. Según el artículo 29 de la Ley de arrendamientos de 2003, en defecto de pacto expreso, de normas forales o de Derecho especial y de costumbre, se aplicarán a la aparcería las disposiciones del capítulo referido a la misma y, con carácter supletorio, las normas sobre arrendamientos rústicos contenidas en los Capítulos II, III y IV del susodicho texto legal.

En lo relativo al Crédito Agrario, estamos ante un contrato que en buena medida atiende a las necesidades de financiación que surgen en el desarrollo de la actividad agraria. Existen varios mecanismos de crédito para financiar las Explotaciones agrarias. Este contrato de préstamo es un crédito ordinario -art. 1740 y 1757 CC- por el que el prestatario -titular de la Explotación Agraria- recibe del prestamista una cosa fungible en propiedad, obligándose aquél a devolver a éste otro tanto de la misma

⁶⁸ (Sánchez 2004a pp. 205 a 241 y de 351 y 352. En su segunda edición de 2006, pp. 295 a 355 y 501 a 505).

especie y calidad. No resulta afectada la naturaleza jurídica del negocio por el hecho de que las cantidades prestadas se destinen a la inversión en la actividad agraria, ni tampoco por los previos requisitos fijados por la Administración Pública que puede subsidiar los intereses en el marco de una política concreta de planificación agraria para la concesión de ayudas y subvenciones. El crédito agrario sigue el régimen jurídico previsto en los cauces por su configuración ordinaria de préstamo con intereses.

Respecto a los seguros agrarios, la actividad agraria sufre, además de los riesgos de producción causados por adversidades climáticas - pedrisco, heladas, sequías, ...- otros derivados de las situaciones vinculadas a la protección medioambiental, a la seguridad alimentaria así como a los procedentes de las nuevas creaciones biotecnológicas -transgénicos, productos fitosanitarios, ...-. Por todo ello, se precisa un buen sistema de seguros que alcance a resarcir los daños causados por los susodichos factores de riesgo y que además resulte capaz de reducir la necesidad de ayudas y subvenciones públicas ante situaciones catastróficas del campo, permitiendo a la vez una planificación controlada de las aportaciones financieras públicas al programa de seguros agrarios.

En España se sigue un régimen mixto -público y privado- en el que la Administración Pública y los aseguradores privados diseñan un sistema de seguros agrarios combinados consistente en la protección frente a riesgos múltiples -climatológicos, incendios...- a partir del diseño por parte de la Administración de un plan en el que se determinan los cultivos y animales protegidos, y se establecen líneas de subvención a las primas y coberturas.

.- En lo referente a los distintivos de calidad de los productos agroalimentarios, en el marco de la normativa de la Unión Europea-destacaremos las indicaciones geográficas – Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas- la Especialidad Tradicional Garantizada, la Agricultura Ecológica, todas ellas de titularidad pública de carácter demanial e inapropiable; y otras marcas de garantía de titularidad pública o colectivas de titularidad privada (en estos dos últimos casos con arreglo a la legislación de marcas). Se trata de signos distintivos de calidad de productos agroalimentarios en base a un sistema de protección de las indicaciones geográficas y de otros factores de calidad de los productos agroalimentarios. El fundamento de este sistema se encuentra también, en que los productos puedan ser identificados más fácilmente contribuyendo a la trazabilidad, sobre todo porque muchos de esos productos agroalimentarios son reflejo de una calidad y de un

patrimonio cultural propio de un lugar. Con estos signos distintivos se añade valor al producto, se le hace más competitivo dada su reputación de calidad, resultando tales signos – que son de titularidad pública- muy útiles a efecto de su publicidad en el mercado, y en último extremo constituyen un impulso al desarrollo rural al vincular la calidad del producto al territorio. Las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios podrán utilizarse por cualquier agente económico que comercialice esos productos y se ajuste al pliego de condiciones correspondiente de cada producto.

En concreto, las indicaciones geográficas son bienes de dominio público y no pueden ser objeto de apropiación individual, enajenación o gravamen. Su uso corresponde a ciertos productores y elaboradores que cumplen con unos requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Indicación Geográfica.⁶⁹

.- En cuanto a las obtenciones vegetales, uno de los mecanismos jurídicos para la tutela de la innovación en materia genética es la protección de los derechos de obtenciones vegetales, regulado por el Derecho internacional. Se trata de coordinar internacionalmente la protección de los derechos de las obtenciones de nuevas especies vegetales como una modalidad de propiedad industrial, cuyo régimen jurídico es distinto al de las patentes, ya que las obtenciones vegetales están estrechamente relacionadas con los ciclos biológicos y no permiten que la simple descripción garantice que se vuelva a obtener el mismo resultado.⁷⁰ Hemos de tener presente que la mejora vegetal es un instrumento esencial para el desarrollo de la producción agrícola en cantidad, calidad y diversidad. Hay que garantizar al obtener un derecho de comercialización en exclusiva de su variedad, que se ha conseguido a través de cuantiosas inversiones en personal e instalaciones a lo largo de años.

.- Un tema importante para el sector agroalimentario es el referido a la comercialización y a las interprofesionales. Resulta fundamental para la coordinación de la cadena agroalimentaria. Hay que producir, pero también hay que comercializar los productos adecuadamente según las exigencias del mercado.

⁶⁹ (Sánchez, 2004b, pp. 195 a 224) y (Sánchez, 2005c, n.º. 39, pp. 237 a 269).

⁷⁰ En España contamos con la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, con sus modificaciones.

La integración vertical, implica una disminución de la capacidad de decisión de los agentes implicados, dada la acción interprofesional a través sobre todo de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIAS), como instrumentos de colaboración y coordinación entre las distintos intervinientes de la cadena agroalimentaria. En el ámbito de la Unión Europea, en su regulación sectorial, se compagina la implementación interprofesional con las normas de defensa de la competencia.⁷¹

La regulación de las interprofesionales se ha relacionado con la elaboración de contratos tipo de productos agroalimentarios⁷² -que concede protagonismo a las interprofesionales-, mediante los cuales se pretende favorecer la transparencia del mercado, mejorando la concurrencia en el mismo. El contrato tipo agroalimentario se refiere a operaciones de tráfico comercial de productos en el sistema agroalimentario y consiste en un modelo de contrato pactado entre los representantes de los sectores productor, transformador y comercializador homologado por el Ministerio de Agricultura en los casos en que el ámbito de aplicación se extiende a más de una Comunidad Autónoma.

.- En lo atinente a la Seguridad Alimentaria, las crisis alimentarias de los años noventa, motivaron la aprobación de normas de seguridad más estrictas en relación con toda la cadena alimentaria para mejorar la reacción rápida en todos los Estados de la Unión Europea ante las crisis de seguridad alimentaria.

⁷¹ Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, modificada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo. Existe regulación aprobada por algunas Comunidades Autónomas, cuyo ámbito territorial es igual o inferior al de la respectiva Comunidad Autónoma.

⁷² Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios. Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios

La Seguridad Alimentaria pasa a ser un objetivo transversal integrado en todas las Políticas de la Unión Europea, especialmente en la PAC, en la protección de los consumidores y defensa del Medio Ambiente.

Tanto la normativa de seguridad alimentaria de la Unión Europea, como legislación interna de sanidad vegetal y animal, presentan como rasgos comunes la trazabilidad y el principio de cautela o protección, la responsabilidad de todos los agentes de la cadena y la información al consumidor. En este ámbito destaca la importancia de la problemática referida al resarcimiento de los eventuales daños causados por los alimentos y concretamente la responsabilidad civil del productor agrario por alimentos defectuosos o inseguros.⁷³

La responsabilidad civil por alimentos inseguros, que comprende todos los productos agrarios con independencia de que se destinen o no a la alimentación humana (distinto del producto inútil por vicios ocultos y del producto peligroso), tiene carácter de objetiva y extracontractual, bastándole a la víctima con acreditar el daño y la relación de causalidad de ese daño con el defecto del alimento.⁷⁴ Se trata de una responsabilidad civil extracontractual que goza de un régimen especial, distinto del común (plazo de prescripción o extinción de la misma). Se trata de una responsabilidad independiente de la falta de utilidad por vicios ocultos y del cumplimiento de las obligaciones contractuales, que protege a cualquier perjudicado y establece solidaridad entre todos los responsables. No se abarcan todos los daños sufridos, extendiéndose sólo a la muerte y a las lesiones corporales del perjudicado, así como a los daños patrimoniales sufridos en bienes distintos del producto defectuoso y siempre que éste se halle objetivamente destinado al uso o consumo privado.

.- En cuanto a la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea tras la reforma del año 2021, obedece al objetivo de estar más centrada en los resultados y orientada al mercado y así alcanzar una mayor modernización y sostenibilidad del sector agrario. La reforma se basa fundamentalmente en tres elementos: el fomento de un sector agrario inteligente, competitivo y diversificado que garantice la seguridad

⁷³ (Sánchez 1996, pp. 247 a 258).

⁷⁴ LIBRO TERCERO Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

alimentaria; apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la acción por el clima; y por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Esta nueva PAC se articula sobre una mayor subsidiariedad respecto de los Estados miembros, quienes sobre la base de la situación y necesidades específicas, diseñan sus propias intervenciones que se incluirán en el Plan estratégico de la PAC de cada Estado.

Por todo ello la Unión Europea aprobó varios Reglamentos⁷⁵ que tienen los siguientes objetivos:

1º.- *Garantizar una renta justa a los agricultores*, renta que haga viable la actividad agraria y así el sector agrario mejore la seguridad alimentaria. Si queremos tener asegurada la producción agraria se tiene que garantizar la sostenibilidad económica de la producción agraria.

2º.- *Aumentar la competitividad* y reforzar que la producción agraria se oriente hacia el mercado e incrementar su competitividad mediante la investigación, la tecnología y la digitalización, así como el desarrollo de las infraestructuras rurales, sistema de asesoramiento eficaces y formación permanente para los responsables de las explotaciones.

3º.- *Mejora de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria*. Actualmente el productor agrario tiene un porcentaje de valor añadido bajo; estancado en la cadena de valor debido a los elevados costes de los insumos, las oscilaciones de la producción y la incorporación de nuevos servicios. Se precisa mejorar la posición de los productores agrarios en la cadena de valor, reforzando la cooperación entre los

⁷⁵ Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013; Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y el Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión.

productores agrarios, aumentando la transparencia del mercado y garantizando mecanismos eficaces contra prácticas comerciales desleales.

4°.- *Contribuir a la mitigación del cambio climático.* El sector agrario puede desempeñar un papel clave para alcanzar los compromisos de sostenibilidad y bioeconomía. Para ello se ha de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la captura de carbono y fomentar el uso de energías sostenibles, todo ello a través de nuevas técnicas de gestión de explotaciones y del suelo y evaluando los riesgos del cambio climático para la agricultura.

5°.- *Proteger el medio ambiente mediante la gestión eficiente de los recursos naturales* como el agua, el suelo, el aire; reduciendo la dependencia de los productos químicos. En concreto, el suelo es uno de los recursos naturales más importantes, ya que suministra nutrientes esenciales -agua y oxígeno- y sustenta a las plantas.

6°.- *Preservar los paisajes y la biodiversidad.* La actividad agraria depende de la biodiversidad, ya que ésta desempeña un papel fundamental en la conservación de hábitats y especies dependientes de las tierras agrarias. Hay que detener e invertir el proceso de pérdida de biodiversidad y conservar los hábitats y los paisajes.

7°.- *Apoyo al relevo generacional.* La actividad agraria precisa de jóvenes agricultores cualificados e innovadores dispuestos a responder a las demandas de alimentos de calidad. Por ello se debe favorecer el relevo generacional para impulsar también el desarrollo sostenible de las zonas rurales.

8°.- *Mantener las zonas rurales dinámicas,* con empleo y crecimiento, mejorando las condiciones de vida. Se ha de promover la participación de la mujer en la agricultura, la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible.

9.- *Proteger la calidad alimentaria y sanitaria,* respondiendo a las demandas de la sociedad en cuanto a la alimentación y la salud. Una alimentación de calidad, segura, nutritiva y producida de forma sostenible.

Se ha de reducir el desperdicio de alimentos⁷⁶, mejorar del bienestar de los animales y luchar contra la resistencia a los antimicrobianos en la ganadería.

10.- *Impulsar el conocimiento y la innovación,* con el intercambio de conocimientos, la formación, el asesoramiento y la innovación para

⁷⁶ Se ha aprobado la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

garantizar una ganadería y una silvicultura sostenible. Modernizar la agricultura requiere intercambio de conocimientos, innovación y digitalización, su adopción por los productores agrarios facilitándoles el acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación agraria.

2.-PROSPECTIVA DEL OBJETO DEL DERECHO AGRARIO.

El desafío en que se encuentra el objeto del Derecho Agrario actual es el de ampliar su contenido sin perder de vista sus referencias peculiares, poniendo de manifiesto su propia transversalidad con otras ramas del Derecho.⁷⁷

El objeto del Derecho Agrario se amplía para que pueda abordar las nuevas referencias de la actividad productiva agraria en el contexto actual, acogiendo nuevos aspectos conexos a la misma y su especialidad, dotando a nuestra disciplina de identidad.

El objeto del Derecho Agrario evoluciona, sin dejar a un lado la regulación de la propia actividad agraria de producción, para acoger nuevas referencias y aspectos de los mercados, del medio ambiente, cambio climático, conservación de los suelos, ...

El contexto de la actividad de producción agraria -la conectividad (conexión) con ésta -, que no solo son las actividades complementarias, identifica los nuevos aspectos del objeto de nuestra disciplina y de su regulación. Se pone así de manifiesto una vis atractiva -una fuerza de atracción- de la propia actividad de producción agraria que hace que el objeto del Derecho Agrario se vaya ampliando acumulativamente en atención a las nuevas referencias o nuevos aspectos que comprende el objeto de nuestra disciplina.

En conclusión, como afirma (Luna 2006, pp.18 y 19), el Derecho Agrario en España se ha consolidado tras la acumulación sucesiva de sus

⁷⁷ Como ocurre, por ejemplo, con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. También hemos de tener presente las negociaciones con otras Organizaciones Internacionales -vg. acuerdos de la UE/Mercosur- que no son bien vistos por las asociaciones europeas de productores agrarios dado el impacto que pueden tener en el sector agrario de la UE teniendo presente que los productos que procedan de los países integrantes del Mercosur no cuentan con los mismos estándares de producción agrícola que los productos agrarios de la UE.

referencias básicas en su evolución.⁷⁸ Los aspectos básicos del objeto del Derecho Agrario en el tiempo no se ha sucedido por sustitución sino por progresiva acumulación. En este sentido, se han producido una sucesiva superposición de los diferentes aspectos básicos en la evolución del Derecho Agrario español. Apareció como “ius propium” de la tierra y otros derechos reales y personales sobre las fincas rústicas, desmembrándose del Código Civil y superando la distribución de toda normativa jurídica entre el Derecho público y Derecho Privado.⁷⁹ Aparece el Derecho Agrario en España por la exigencia de un conjunto normativo que atendiese a la realidad del agro, cuya regulación en el Código Civil y Derechos Forales o Especiales era insuficiente porque la actividad de producción agraria presentaba unas particularidades socioeconómicas y técnicas diferentes a las de otras actividades económicas, lo que no es óbice para que aún hoy resulten de aplicación a nuestra disciplina normas del Código Civil o, en su caso, de los Derechos civiles autonómicos.⁸⁰

Pero el objeto del Derecho Agrario español continuo su evolución gestándose como un sector normativo con especificidad individualizada sobre factores socioeconómicos y técnicos, desmembrándose del propio Derecho Civil por la necesidad de normas diferentes para atender a sus peculiaridades propias y encauzar la problemática socioeconómica y técnica de la actividad agraria.⁸¹

La evolución del objeto del Derecho Agrario español y de otros países, se caracteriza por su continua ampliación y creciente complejidad, así como por una constante adaptación a los aspectos socioeconómicos y técnicos de cada momento, en el caso de España, como Estado integrado en la Unión Europea, plasmados fundamentalmente en la PAC.

El Derecho Agrario actual es fruto de una evolución disciplinar, cuyo objeto, como señala (Luna 2002, p.729) “se compone, por continuada

⁷⁸ (Luna 2006, pp.18 y 19).

⁷⁹ (Luna 2006, pp.13: “como compartimentos estancos y entre ellos sin contaminación”.)

⁸⁰ Sirvan de ejemplo los artículos 483, 485 y 499 del Código Civil sobre usufructo de viñas y olivares, de bosques o de ganados.

⁸¹ (Luna 2006, pp.15 entiende que el Derecho agrario está “ordenado a atender a la situación concreta de los que se dedican a aquella específica actividad y le han impreso sus rasgos característicos”. Por ello, entiende que el Derecho Agrario se presenta “como un Derecho profesional... que pone el acento en su sujeto protagonista y lo contempla en el ejercicio de su actividad económica, ha de considerarse como la única jurisprudencia de su existencia como Derecho especial”).

agregación y por necesaria acumulación, de instituciones que se reparten en las fases de la evolución de la disciplina”.⁸²

Por consiguiente, el Derecho Agrario es un agregado normativo que progresivamente ha venido asentando su objeto en la propiedad de la tierra y en los bienes agrarios que con ella se relacionan, en la actividad de producción agraria, y en una serie de nuevos aspectos o referencias que se relacionan con la propia actividad agraria a modo de elementos de conexión y relaciones jurídicas de interferencia.

Por tanto, hoy el objeto del Derecho Agrario va mucho más allá de la actividad agraria y de los bienes útiles para la misma, ampliándose progresivamente para comprender a todos aquellos aspectos vinculados con el contexto de la propia actividad productiva, como el ambiente, los recursos naturales, el cambio climático y otros aspectos de las actuales técnicas agronómicas y alimentarias, referidas, por ejemplo, a la obtención vegetal, sanidad animal y vegetal, semillas, creaciones fitosanitarias, agroquímicos, etc...

De esta manera, el objeto del Derecho Agrario, en su evolución, cada vez será más amplio para responder al contexto de los avances en que la actividad agraria actual se desenvuelve, alcanzando, por ejemplo, aspectos relativos a la seguridad alimentaria dentro del desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio climático, etc...⁸³

3.- CONCLUSIONES.

El Derecho es uno y el Derecho Civil es el depósito de casi toda la doctrina general del Derecho y la parte principal del Derecho Privado, y es Derecho supletorio de todas las demás ramas del Derecho Privado y telón de fondo de todo el Derecho.

El Derecho agrario es una rama del Derecho novísima e *in fieri* -en formación-. Constituye una disciplina cuyo perfeccionamiento legislativo ayuda al sector agrario para gozar de rentas justas, cumpliendo con unas funciones productivas y de protección del medio ambiente, manteniendo para el futuro el suelo fértil, las aguas limpias y la necesaria diversidad vegetal y animal.

El centro del Derecho Agrario es la actividad agraria de producción y precisa para el futuro ampliar sus horizontes acompañados con los nuevos

⁸² (Luna 2002, p.729).

⁸³ (Pastorino, 2024, pp. 34 y 35).

tiempos, nuevas tecnologías, nuevas circunstancias y biotecnología animal y vegetal.

Entiendo que el objeto del Derecho Agrario evoluciona sin dejar a un lado la regulación de la actividad agraria, pero acogiendo nuevas referencias y aspectos como son, entre otros, los mercados, el medio ambiente, el cambio climático, la protección de los animales, la digitalización e inteligencia artificial...

Se manifiesta así una vis atractiva de la actividad agraria que hace que el objeto del Derecho Agrario se amplíe acumulativamente con nuevas referencias o aspectos, ya sea por conexión o conectividad.

El objeto del Derecho Agrario se va ampliando paulatinamente tras la acumulación sucesiva de sus propias referencias básicas, aspectos que no se han sucedido por sustitución sino por una progresiva acumulación y una sucesiva superposición de tales referencias básicas.

El Derecho Agrario apareció como un *ius propium* de la tierra y de otros derechos reales y personales sobre las fincas rústicas, ante la insuficiencia del Código Civil para regular ciertos aspectos básicos de la actividad agraria, que cuenta, como sabemos, con sus propias particularidades técnicas, económicas y sociales.

La evolución del objeto del Derecho agrario se caracteriza por una constante adaptación a los nuevos aspectos plasmados fundamentalmente en la Política Agraria Común de la Unión Europea vinculados con la propia actividad agraria, como son, entre otros, las nuevas referencias al ambiente, a los recursos naturales, al paisaje, al cambio climático, a las técnicas agronómicas y obtenciones vegetales, sanidad animal y vegetal, semillas, creaciones fitosanitarias, agronómicas, ...

En definitiva, el objeto del Derecho agrario, en su evolución, se amplía constantemente para responder por conexión o conectividad a los avances en que se desenvuelve la actividad agraria de producción, sometida a transformaciones climáticas, ecológicas, demográficas, tecnológicas, económicas, de investigación e innovación, teniendo presente que y la investigación y la innovación contribuyen a la sostenibilidad y competitividad de la actividad agraria mediante la digitalización, las energías renovables, la utilización de subproductos, la gestión integral del agua,...

Por tanto, el objeto del Derecho Agrario, con la continua ampliación de su objeto por su sucesiva agregación y por su necesaria acumulación de instituciones, que marca su propia evolución, tiende a abarcar cuanto directa e indirectamente tiene conectividad o conexión con la propia

actividad agraria, constituyendo un agregado normativo con especialización, superando, por su transversalidad jurídica, la *suma divisio* que distribuía toda la normativa jurídica entre el Derecho público y el Derecho privado como compartimentos estancos sin comunicación.

Aquí dejo plasmadas estas ideas, espero que otros con más profundidad puedan continuar con esta tarea.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO PÉREZ, Mariano. (1973), “Actitud metodológica en la sistematización del Derecho agrario”, *Anuario de Derecho Civil*, vol. 28, nº. 23, pp. 809-826.

AMAT LLOMBART, Pablo. (2023). “Evolución histórica y modernas tendencias normativas del derecho agrario contemporáneo comunitario y español”, *Revista de Estudios Agro-sociales y Pesqueros*, 261, pp. 185 a 241.

BALLARÍN MARCIAL, Alberto. (1951). “La reforma agraria en Italia”, *Revista de Administración Pública*, nº 5, pp. 299 a 324.

BALLARÍN MARCIAL, Alberto. (1953a), “EL Código Civil y la agricultura”, *Revista de Estudios Agro-sociales*, nº2, pp. 7 a 89.

BALLARÍN MARCIAL, Alberto. (1953b). “Introducción al estudio de la Ley de concentración parcelaria”, *Revista de Estudios Agro-sociales*, nº. 4, pp. 69 a 91

BALLARÍN MARCIAL, Alberto. (1975). *Estudios de Derecho Agrario y Política Agraria*. Zaragoza, Imp. Tipo-Línea, S.A.

BALLARÍN MARCIAL, Alberto. (1979). *Derecho agrario*, Madrid, Ed. de Derecho Privado, 2ª. Ed.

BASSANELLI, Enrico. (1946). *Corso di Diritto agrario*, Milan, Giuffrè,

- BOLLA, Giangastone. (1963). Programa della Rivista di Diritto Agrario, Rivista di Diritto Agrario, I, reeditado en G. Bolla, *Scritti di Diritto Agrario*, Giuffrè, pp. 169 y ss.
- CARROZZA, Antonio. (1988a). “Voz Diritto Agrario”, *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, UTET, 1981. Appendice II, pp. 1153 y ss.
- CARROZZA, Antonio, (1988b) *Lezioni di diritto Agrario*, T.I, Giuffrè, Milano.
- CARROZZA, Antonio, (1992) “La ricostruzione teorica del sistema del Diritto Agrario attraverso i suoi istituti. Ragionamenti sulla técnica da applicare”, *Rivista di Diritto Agrario*, Fasc.2, pp. 392 y ss.
- CASADEI, Ettore. (2001). “Imprenditore agrícola, I tre “decreti orientamento”: della pesca e acuacultura, forestale e agrícola (D. Leg. 28 maggio 2001, nn. 226, 227 e 228)”, *Le nuove leggi civile commentate*, Fasc. III-IV.
- CASCIO, Orlando. (1952), *Corso de Diritto agrario*, Parlemo, S. F. Ed. Flaccovio.
- COSTA MARTÍNEZ. Joaquín (1915), *Colectivismo agrario en España, Partes I y II, Doctrinas y hechos*, Madrid, Biblioteca Costa,
- COSTA MARTÍNEZ. Joaquín. (1911). *Política hidráulica. Misión social de los riegos en España*, Madrid, Biblioteca Costa.
- DEL CASTILLO R. DE LA BORBOLLA, Francisco y PAJARÓN JIMÉNEZ, Jerónimo (1932). *Manual jurídico del agricultor*, Madrid.
- DE CASTRO Y BRAVO, Federico. (1949). *Derecho Civil de España*, Madrid, p. 207 y ss.
- DE CASTRO Y BRAVO, Federico. (1954). “El Derecho agrario de España. Notas para su estudio”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 7, nº. 2. pp. 377 a 404.

DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, José Luis. (1972). *Estudios de Derecho Agrario*, Madrid, Tecnos.

GARCÍA CANTERO, Gabriel. (2001). “Un siglo de Derecho Agrario”, Conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 5 de abril de 2001.

GOLDONI, Marco. (2002). “Imprenditore agricolo, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n° 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n°57”, *Revista di Diritto Agrario*, Fasc. 2-3. p. 213 y ss.

HERNÁNDEZ GIL, Antonio. (1943). “El concepto de Derecho Civil”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, p. 152 y ss.

HERNÁNDEZ GIL, Antonio. (1971), *Metodología de la ciencia del Derecho*, Vol. II, Madrid, Tecnos.

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1795). *Informe de la Sociedad económica de esta corte al real y supremo Consejo de Castilla en el expediente de la ley agraria*, Madrid, Sancha.

LEAL GARCÍA, Alejo. (1954) “Ley sobre fincas manifiestamente mejorables”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 7, n°.1, pp. 175 a 196.

LONGO, Mario. (1952). *Profili di Diritto Agrario italiano*, Turín, G. Giappichelli Editore.

LUNA SERRANO, Agustín. (2002). “El sentido de la evolución del Derecho Agrario”, en *Agricultura ante el tercer milenio* (Lledó Yagüe, F. Edt. y Herrera Campos, R. Coord.), Dykinson, Universidad de Almería, Ayuntamiento de El Ejido, pp. 733 y ss.

LUNA SERRANO, Agustín. (2006), “Aparición y consolidación del Derecho Agrario”, en *Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica*, Libro homenaje al Prof. Dr. Agustín Luna Serrano (Coord. Herrera Campos, R. y Cazorla González, M^a. José), Universidad de Almería, pp. 13 y ss.

- MUÑIZ ESPADA, Esther, (2025), *Derecho Forestal y montes de socios: por otro modelo de ordenación de la propiedad*, Madrid, Reus.
- MUÑIZ ESPADA, Esther, (2024), “Los contratos alimentarios, problemas derivados de la determinación del precio”, en *Las necesarias reformas legislativas de la nueva política agraria, especial referencia, Castilla y León*, Aranzadi, Navarra, pp. 421 a 471.
- PASTORINO, Leonardo. (2024), “El desafío de ampliar el contenido del Derecho agrario en el contexto actual, sin perder de vista su sistemática”, en *Direito Agário. Compreensão Jurídica à COP 30*, Belém do Para, Brasil, (De Miranda, G. y Eloana, T. Coord.), pp. 17 a 36.
- PÉREZ TEJEDOR, Manuel y Serrano Moreno, Esteban, (1951). *Arrendamientos Rústicos*, Gerona, Dalmau Carles y Pla S.A. Editores.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (1996). “La responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados en los consumidores por los residuos de los productos fitosanitarios en los vegetales sin transformación”, *El papel de los consumidores en la protección ambiental*, (Vercher, A. y Peris, E., Eds), Universidad Politécnica de Valencia, pp. 247 a 258.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (1997a). “La concurrencia de los retractos de comuneros y colindantes ante la enajenación inter vivos de fincas rústicas en arrendamiento”, *Anuario Jurídico de La Rioja*, nº.3, pp. 27 a 43.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (1997b). “La unidad mínima de cultivo y el régimen del suelo no urbanizable, en *Estudios de Derecho Agrario*, Coord. J.M. Ruiz -Rico Ruiz, Universidad de Málaga, pp. 337-349.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (1998a). Régimen jurídico en torno al uso agrario de las aguas, en *Revista di Diritto Agrario*, fasc. 4, pp. 336 a 371.

- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (1998b). “Presunción posesoria otorgada por el catálogo de montes de utilidad pública y la usucapión de montes públicos patrimoniales catalogados”, *Congreso Español de Derecho Agrario y Ordenación rural*, Zaragoza, pp. 381 a 422.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2002). “El Derecho Agrario en España. Perspectiva histórica y prospectiva”, en *Derecho Agrario ante el tercer milenio*, (Dir. Herrera Campos, R.), Madrid. Dykinson, pp. 1107-1138.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2003). “Configuración jurídica de la actividad agraria en España”, en *Prodotti agricola e sicurezza alimentare*, T. I, Milano, Giuffre Editore, pp. 216 y ss.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2004a) “Gastos y mejoras”, en *Comentarios a la Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003* (Coord. J. M^a Caballero Lozano), Madrid, Dykinson, pp. 205 a 241 y de 351 y 352. En su segunda edición de 2006, pp. 295 a 355 y 501 a 505.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2004b). “Aspectos jurídicos de la calidad de los productos agroalimentarios en España”, en *L’agricoltura dell’area mediterránea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici*, Milano, Giuffrè editore, pp. 195 a 224.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2005a). “Uso agrario del agua y medio ambiente”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, nº2, abril-junio, pp. 279 a 307.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2005b). “El régimen jurídico del aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras”, *Revista Jurídica de Castilla-La Mancha*, nº 38, abril, pp. 201 a 276.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2005c). “Aproximación al régimen jurídico vitivinícola español: algunos aspectos significativos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino”, *Revista Jurídica de Castilla-La Mancha*, diciembre, nº 39, pp. 237 a 269.

- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2007). “La concentración parcelaria y sus fases”, en *Principales novedades legislativas en el régimen jurídico de la actividad agraria*, Logroño, Gobierno de La Rioja, pp. 253 a 265.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel. (2023). “La configuración unitaria y el derecho de superficie rústica en el Derecho Común”. *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, nº4, octubre-diciembre, pp. 659 a 698.
- VALVERDE Y VALVERDE, Calixto. (1909). *Tratado de Derecho Civil Español*, T. I., Valladolid, Talleres Tipográficos Cuesta, p.10 y ss.